

# Corrupción y crisis política en Brasil: evolución y perspectiva

*Por Matías Franchini*

## DOCUMENTOS

Como bien se sabe, los episodios de corrupción no son rarezas en Latinoamérica, tampoco escuchar a algún dirigente de alto perfil hacer referencia a irregularidades en el manejo de la cosa pública, desde lavado de dinero hasta financiación ilegal de la política. Sin embargo, las denuncias encaminadas por el entonces diputado y presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB) Roberto Jefferson han tenido una diferencia casi esencial con otros casos similares. Han incluido un alto nivel de detalle, dando precisiones sobre qué, quién y cómo funcionaba el esquema aludido. Precisiones que, con el andar del tiempo y de las investigaciones - y con no poca ayuda de la prensa - han sido ratificadas en los hechos. Queda todavía por ver cómo impactará el escándalo en la marcha del gobierno de Lula en el año y poco más que le queda de mandato y cómo afectará las eventuales aspiraciones reeleccionistas del actual presidente. Tarea de difícil tenor, dada la vertiginosa e impredecible dinámica de la crisis.

**Matías Franchini** es Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales (Universidad Católica Argentina) y Analista del Área Política Latinoamericana del Centropara la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).



Desde hace varios meses, Brasil se encuentra inmerso en una seria crisis política motivada por una interminable catarata de escándalos de corrupción que ha afectado, directa o indirectamente, a las principales instituciones de su democracia. Iniciada con la revelación de la grabación de un aparente soborno, la crisis se ha desarrollado envolviendo a ministros, legisladores, dirigentes partidarios, empresarios y titulares de empresas estatales, ha paralizado la agenda política, ha reabierto el debate interno sobre la necesidad de ciertos cambios estructurales en el sistema político (aunque quizás no de la manera más deseable) y ha mudado la correlación de fuerzas entre las distintas instancias que se disputan el poder en la esfera pública.

Como bien se sabe, los episodios de corrupción no son rarezas en Latinoamérica, tampoco escuchar a algún dirigente de alto perfil hacer referencia a irregularidades en el manejo de la cosa pública, desde lavado de dinero hasta financiación ilegal de la política, sin embargo, las denuncias encaminadas por el entonces diputado y presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB) Roberto Jefferson han tenido una diferencia casi esencial con otros casos similares. Han incluido un alto nivel de detalle, dando precisiones sobre qué, quién y cómo funcionaba el esquema aludido. Precisiones que, con el andar del tiempo y de las investigaciones - y con no poca ayuda de la prensa - han sido ratificadas en los hechos.

Las afirmaciones realizadas por Jefferson, y las posteriores investigaciones, informaciones e incluso trascendidos, han dejado al descubierto y probado la existencia de mecanismos poco claros de financiación de los partidos políticos (especialmente del "inmaculado" PT), han tendido un manto de sospecha sobre la forma en que de hecho son tramitadas las leyes y los apoyos legislativos, han arrojado datos sobre la utilización de las reparticiones públicas (empresas estatales, ministerios y secretarías) como botín político y han dejado fuertes cuestionamientos acerca de las relaciones entre poder económico y poder político. Y a pesar de que por el momento los ejes centrales de los esquemas de corrupción denunciados no han sido completamente probados y que la mayoría de las investigaciones se encuentran aun en curso, la opinión pública brasileña ya considera que estos mecanismos forman parte de la cotidianeidad del funcionamiento del sistema político. En este sentido, da la impresión de que ni siquiera las denuncias hayan sido sorpresivas en cuanto a su contenido, del cual se sospechaba hace tiempo, sino tan solo en cuanto a su profundidad y las consecuencias que ha tenido y promete tener<sup>1</sup>.

Por lo pronto, la crisis ha mudado el escenario político brasileño tanto en el corto como en el mediano plazo. Ha cambiado las prioridades del gobierno y la oposición, ha obligado la salida de una serie de importantes figuras del gabinete, ha forzado el apresuramiento de una reforma ministerial largamente contemplada y ha arrinconado a una serie de dirigentes históricos del PT, obligados a confesar delitos electorales.

Sumado a esto, queda todavía por ver cómo impactará el escándalo en la marcha del gobierno de Lula en el año y poco más que le queda de mandato y cómo afectará las eventuales aspiraciones reeleccionistas del actual presidente. Tarea de difícil tenor, dada la vertiginosa e impredecible dinámica de la crisis.

### Los hechos

La génesis de la actual crisis puede rastrearse hasta mediados de mayo, cuando la Revista *Veja*, en su edición del día 15, publicó un reportaje en el que se mostraba a un funcionario de la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT) recibiendo dinero de parte de dos empresarios, con el aparente objeto de facilitarles contratos con la empresa estatal. En la misma grabación, el funcionario les explica a sus interlocutores que el esquema de cobros estaba avalado por el Director de administración de ECT y ex diputado del PTB, Osorio Batista y por el propio presidente del partido, diputado Roberto Jefferson, aliado de importancia del Presidente Lula. Como podría esperarse, la denuncia generó grandes movimientos en la primera plana de la política brasileña, entre ellos: la renuncia de Batista, las rotundas negativas de Jefferson respecto a su participación en el esquema denunciado, el apoyo incondicional dado por Lula a su socio y la iniciativa de la oposición (Partido del Frente Liberal -PFL- y Partido de la Social Democracia Brasileña -PSDB-) para instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que se ocupara de las denuncias. La avalancha comenzaba.

Mientras se sentían aun fuerte los ecos de la primera denuncia y el gobierno luchaba a brazo partido para evitar la instalación de la CPI de los Correos (CPI dC), aquella iniciada por la oposición, la revista *Veja* publicó un nuevo reportaje en el cual el ex presidente de Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB, otra empresa estatal) aseguraba que Roberto Jefferson lo había presionado para que transfiriera al PTB la suma de R\$ 400.000 mensuales como recompensa por haber sido indicado por el partido para ese puesto. La crisis se agravaba, aunque no al punto de neutralizar los esfuerzos del gobierno para contenerla. Por aquellos primeros días de junio, todavía parecía posible la desactivación de la CPI dC, que prometía ser el sitio estratégico desde donde la oposición intentaría explotar al máximo las denuncias conocidas, buscando afectar la imagen del gobierno.

Sin embargo, las declaraciones de Roberto Jefferson a *Folha de Sao Paulo* el 6 de junio dispararon la crisis a niveles incontenibles. El todavía presidente del PTB denunció la existencia de un esquema de pagos ("mensalao") a legisladores de la base aliada para asegurarse que éstos votaran en sintonía con las aspiraciones del gobierno. Lejos de ser una denuncia genérica, Jefferson fue generoso en sus precisiones. En aquella oportunidad y en otras posteriores dio detalles sobre los montos: R\$ 30.000 mensuales y en algunos casos una gratificación anual de R\$ 1 millón para cada legislador; sobre

<sup>1</sup> Según el estudio de CNI/Ibope correspondiente a septiembre de 2005, 46% de los encuestados dice creer totalmente en las denuncias de corrupción y del esquema de mensualidades, mientras que solo el 3% las considera totalmente falsas.

los personajes involucrados: diputados del Partido Progresista (PP) y del Partido Liberal (PL), el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Delubio Soares, el secretario general del partido, Silvio Pereira, el empresario publicitario Marcos Valerio Fernandes de Souza y sobre el mecanismo de pago: las cuentas de las empresas de publicidad<sup>2</sup> del nombrado empresario en el Banco Rural. Según este esquema, la directiva del PT, a través de las cuentas del empresario Marcos Valerio, habría contado con dinero suficiente para sobornar a los diputados involucrados.

En su derrotero, Jefferson se cuidó de no involucrar al Presidente en el esquema, por el contrario, dijo que los pagos habían terminado una vez que él mismo le revelara a Lula la existencia de tamaña operación. Llegó incluso a sugerir que las últimas derrotas oficiales en el Congreso (entre ellas la sonada elección de Severino Cavalcanti para la presidencia de la Cámara de Diputados) se debían de hecho a la terminación de las mensualidades.

Pese a no aportar pruebas, el nivel de detalle y gravedad de las denuncias hicieron de las declaraciones de Jefferson un punto de inflexión en la crisis de corrupción que hasta el momento lo había tenido como principal protagonista. Desde aquel momento, se le hizo imposible a la bancada oficialista detener la instalación de la CPI de los Correos y a la postre una nueva CPI que investigara directamente el esquema de pago a legisladores (CPI de las mensualidades). Los escándalos de corrupción se instalaban definitivamente como temas prioritarios en la agenda pública brasileña.

Los días que siguieron no trajeron sino más denuncias y complicaciones. El propio Jefferson amplió sus declaraciones, esta vez involucrando directamente en el esquema de mensualidades el Ministro Jefe de la Casa Civil, José Dirceu, a quien pidió que se retirara del cargo para no perjudicar aun más al presidente Lula. Además admitió haber recibido financiación ilegal por parte de PT para la campaña de las elecciones municipales de 2004, maniobra que pareció intentar justificar al declarar que no era sino una práctica común a todos los partidos<sup>3</sup>. Más adelante, reforzó esta especie de defensa en su presentación ante la CPI de los correos: “No hay campaña de diputado que cueste menos de un millón de reales, pero a la justicia electoral le declaramos 100.000. No hay campaña para senador que cueste menos de dos o tres millones, pero declaramos 300.000” y agregó “Mi declaración fue falsa, así como la de ustedes, y todos lo sabemos”<sup>4</sup>.

La presión constante que Jefferson ejerció sobre Dirceu terminó dando resultado: el otrora súper ministro anunció su

renuncia al cargo ministerial que ocupaba y su vuelta a la Cámara de Diputados para poder desde allí “defender al gobierno”. La crisis de corrupción se llevaba entonces a una figura de enorme relevancia para el gobierno y para el Partido de los Trabajadores. Dirceu había presidido el PT entre 1995 y 2002 y hasta el escándalo de Waldomiro Diniz<sup>5</sup> allá por febrero de 2004, había sido el principal operador político del Planalto y probablemente el hombre más influyente del gabinete nacional.

Poco a poco las denuncias de Jefferson, que jamás presentó prueba alguna, comenzaron a ser ratificadas por los testimonios de otros testigos y las investigaciones de las varias instancias que abordaron el tema (Policía Federal, CPI de los Correos y de las mensualidades, Consejo de Ética de la Cámara, etc.). La señal más evidente de la veracidad de las declaraciones de Jefferson fue la publicación, otra vez por parte de Veja, de una información que probaba el vínculo entre la cúpula del PT y el empresario publicitario Marcos Valerio, hasta entonces negada por las autoridades partidarias. Según datos aportados por la revista, Valerio fue garante de un préstamo de R\$ 2,4 millones obtenido por el PT en febrero de 2003 en el Banco Minas Gerais (BMG). No sólo eso, se informó que el empresario se había hecho cargo de uno de los pagos del préstamo frente a la imposibilidad de que lo hiciera el partido. La cuota fue cercana a los R\$ 350.000. Más todavía, otros garantes formales del préstamo fueron el entonces presidente del PT José Genoíno y el tesorero Delubio Soares. Con el tiempo, trascendió la existencia de otro préstamo avalado por el mismo publicitario.

Conocidos estos datos, la permanencia de la cúpula del PT se hizo insostenible: Soares, tesorero del partido y Pereira, secretario general, pidieron licencia de sus cargos. El presidente Genoíno logró mantenerse en su puesto algunos días más, pero finalmente, y tras la conocerse el trágico hecho de la detención de un secretario de su hermano en un aeropuerto de San Pablo con U\$S 100.000 entre su ropa interior, renunció al cargo el 9 de julio. Como veremos más adelante, desde hacía semanas diversos sectores partidarios venían pidiendo la cabeza de los máximos directivos del PT, decisión que se demoró en virtud de tensiones internas.

Mientras tanto, y por esos mismos días, el Presidente Lula anunciaba cambios en el gabinete nacional, como mecanismo para paliar la crisis. El primero de ellos fue el nombramiento de Dilma Rousseff, una mujer de conocidas dotes técnicas, como reemplazo de Dirceu en la Casa Civil, seguido por la ampliación unos días más tarde de la presencia del PMDB

<sup>2</sup> Las empresas de Marcos Valerio tienen millonarios contratos publicitarios con empresas estatales como ECT, Electronorte o Banco de Brasil, hecho que, al conocerse las denuncias en cuestión levantó fuertes sospechas sobre la legalidad de dichos contratos. Mas adelante se conocería incluso, que esos mismos contratos sirvieron como garantía para los préstamos bancarios que Marcos Valerio negocio para financiar al PT.

<sup>3</sup> Dicha confesión lo llevaría mas adelante a perder su mandato como diputado, por falta de decoro parlamentario.

<sup>4</sup> El Nuevo Herald ([www.nuevoherald.com](http://www.nuevoherald.com)), 2 de julio de 2005.

<sup>5</sup> El 13 de febrero de 2004 la revista Epoca publicó un informe en el que se revelaba que el Jefe de Asuntos Parlamentarios de la Casa Civil (hombre cercano a José Dirceu), Waldomiro Diniz había sido filmado recibiendo sobornos por parte del empresario clandestino de juegos Carlos Augusto Ramos, alias Carlinho Cachoeira, con el fin de financiar algunas campañas políticas, entre ellas la de Geraldo Magela (PT) que corría por la gobernación del Distrito Federal (DF) en 2002. La transacción fue filmada ese mismo año por Cachoeira, cuando Diniz era Director de Loterj (Lotería del Estado de Río de Janeiro).

oficialista en la explanada de los ministerios. Le llegó luego el turno a Luiz Marinho, presidente de la CUT (Central Única de Trabajadores) que asumió la cartera de Trabajo. Entre las medidas tomadas por Lula también estuvieron la creación y extinción de secretarías federales. Quedaría todavía lugar para la inclusión del PP en el gabinete y para algunos anuncios relativos al llamado “choque de gestión” que veremos más adelante.

En tanto las investigaciones seguían su curso se daban a conocer una serie de listas con las personas autorizadas a retirar dinero de las cuentas de las empresas de Marcos Valerio en el Banco Rural. Entre ellas figuraban nombres vinculados a legisladores o referentes partidarios del PT, PL y PP. El propio líder de la bancada de diputados del PT, Paulo Rocha pidió la renuncia a su cargo después de confesar haber retirado R\$ 300.000 de dicho banco. En actitud similar, días más tarde, el presidente del PL (hasta entonces partido del Vicepresidente José Alencar), diputado Valdemar Costa Neto, abandonó su banca en el Congreso tras reconocer haber recibido dinero a través del esquema de “caja dos” en la campaña 2002. Los indicios sostenían, una vez más, la veracidad de las denuncias de Jefferson. Las declaraciones de dos de los principales implicados en el esquema denunciado por el ex presidente del PTB, terminaron por abonar aun más aquella hipótesis. En distintas instancias, el empresario Marcos Valerio y el ex tesorero Delubio Soares, confesaron haber confeccionado un esquema de financiamiento paralelo para el Partido de los Trabajadores, a través de las empresas de publicidad. Sin embargo, ambos sospechados negaron rotundamente la existencia de las “mensualidades” y afirmaron que ese dinero no declarado a los organismos correspondientes era utilizado para gastos de campaña y otros corrientes, nunca para sobornar legisladores. Sin embargo, dichas declaraciones no han servido para disipar las sospechas sobre la existencia de un esquema de “compra de voluntades”. Por el contrario, se especula que las “confesiones” de Soares y Valerio forman parte de una estrategia legal para que sus actos ilegales sean caratulados como crímenes electorales, para de esta forma evitar sanciones de mayor rigor. No ha faltado quien incluya en esta estrategia al propio presidente Lula, quien, por los mismos días en que aquellos dos “revelaban” la llamada “caja 2”, reconocía él también la existencia de programas ilegales de financiación partidaria, aunque aclarando que lo hecho por el PT no era sino práctica común en la política brasileña, con el aparente objetivo repartir culpabilidades a todas las fuerzas. A medida que el tiempo pasaba y la crisis se hacía más intensa, nuevas informaciones iban saliendo a la luz. Transcendieron versiones sobre los vínculos que tendría el empresario Marcos Valerio con ciertos sectores de la oposición (nada menos el presidente del PSDB, Eduardo Azeredo, que habría recibido financiación de las empresas del publicitario para su campaña a la reelección de gobernador de Minas Gerais en 1998), el

Poder Judicial e incluso con Organizaciones no Gubernamentales.

Sin embargo, la gran conmoción por aquellos primeros días de agosto fue causada por las declaraciones de Duda Mendonça y de Valdemar Costa Neto, que comprometieron por primera vez en lo que iba de la crisis la figura del propio Presidente del Brasil. El reconocido publicitario Duda Mendonça, uno de los artífices primordiales de la elección de Lula, reconoció frente a la CPI de los Correos el 11 de agosto que casi la mitad del valor de las campañas del PT en el año 2002 fueron pagadas por el empresario Marcos Valerio a través de remesas no declaradas para el exterior, es decir a través de la “caja dos”. Lo que levantó fuertes sospechas sobre la legalidad de la financiación de la campaña (también en 2002) que llevó a Lula a convertirse en presidente de Brasil. Esto pese a que el propio Duda afirmó que creía que los fondos de aquella campaña habían sido enteramente declarados a la justicia electoral, en un intento de apartar al mandatario de cualquier sospecha.

Por su lado, Costa Neto, lejos de intentar preservar al presidente en sus declaraciones, buscó directamente involucrarlo. En una entrevista a la Revista Época afirmó que Lula sabía de un acuerdo, cerrado en 2002, entre el PT y el PL por el cual este se comprometía a apoyar políticamente a aquel a cambio de R\$ 10 millones. Según sus palabras, no sólo Lula tendría conocimiento, sino que también habría participado en la negociación junto al hoy vicepresidente José Alencar. Costa confesó haber recibido R\$ 6,5 millones de aquella suma, aunque se cuidó de aclarar que no fueron a para a los diputados del PL, sino para gastos de campaña, utilizando un argumento ya conocido.

Es en este punto que la crisis alcanzó el mayor nivel de amenaza para los intereses del Planalto y mostró al presidente Lula en su pico de vulnerabilidad. Al daño hecho por las declaraciones anteriores, por esos días se sumó el trabajo de la empresa Datafolha<sup>6</sup> cuyos resultados mostraban por primera vez desde la asunción de Lula, que este ya no era favorito absoluto para ganar las elecciones de 2006 (tendencia que fue sostenida por investigaciones posteriores). A su vez, la oposición, realizaba una serie de encuentros para analizar la posibilidad de iniciar un proceso de juicio político contra el primer mandatario (impeachment). Si en algún momento de la crisis un alejamiento forzoso de Lula de su cargo se contempló como salida de la crisis, ese momento fue este. Sin embargo, la tormenta pasó, las fuerzas opositoras juzgaron con buen tino- que no existían causales reales para terminar el mandato de Lula y observaron acertadamente que no había ni en el Congreso ni en la opinión pública, “clima de impeachment”. El hecho de que no surgieran posteriormente nuevas denuncias que involucraran directamente a Lula, fueron alejando cada vez más el fantasma del juicio político.

<sup>6</sup> La encuesta datafolha divulgada el 12 de agosto de 2005 mostró que en simulaciones de primera vuelta a un Lula en con dicción “empate técnico” con el alcalde de Sao Paulo y ex contendor a la Presidencia José Serra (PSDB): 30% a 27% en intención de voto, pero perdiendo en segundo turno por 48 a 39%.

De todos modos, la crisis volvió a dar un giro dramático sobre principios de septiembre, esta vez teniendo como principal protagonista al Presidente de la Cámara de Diputados Severino Cavalcanti (PP), titular de un puesto de enorme relevancia institucional y política. El diputado fue acusado por un empresario gastronómico de haberlo forzado a sobornarlo para así poder mantener la licitación de una serie de restaurantes en el Congreso. Pese a que en un primer momento Cavalcanti negó terminantemente las denuncias, el peso de las pruebas lo obligaron a renunciar sobre fines de septiembre, abriendo un complicado proceso de sucesión que terminó con una apretada pero significativa victoria por parte del candidato oficialista Aldo Rebelo (PC do B).

La elección de Aldo Rebelo como presidente de la Cámara de Diputados, de casi vital importancia para el Palacio del Planalto, ha inaugurado una nueva etapa en la crisis y parece haber abierto un espacio para que el gobierno pueda empezar a superar los obstáculos que hasta hace poco tiempo parecían tenerlo cercado. Sin embargo, sería erróneo suponer que la crisis ha sido superada definitivamente: distintas instancias políticas y judiciales continúan aún con sus investigaciones, todavía queda por ver cuál será el destino final de los diputados involucrados en los hechos de corrupción, cuál será la suerte de los dirigentes y empresarios que participaron del esquema y finalmente, y si esta crisis ha mostrado algo, es que la fuente de los escándalos parece ser inagotable y todavía puede aparecer algún dato que vuelva a cambiar la dirección de los acontecimientos.

### Algunas consideraciones sobre la crisis

En este escenario tan complejo y cambiante, es difícil hacer afirmaciones concluyentes sobre el desenlace y las consecuencias que la crisis pueda tener. Es posible sin embargo, hacer algunas observaciones sobre lo que ha dejado hasta aquí el tránsito del escándalo.

### El gobierno

Cabe hacer primero algunas referencias alrededor de las acciones que ha tomado el gobierno a lo largo de la crisis, sobre todo si se tiene en cuenta que, a pesar que ha ido mudando su comportamiento conforme mudaba el cuadro de situación, queda la sensación de que las respuestas del Planalto han sido tardías y mal articuladas, permaneciendo siempre un paso atrás de los acontecimientos.

- En la antesala de la crisis, el gobierno hizo caso omiso a los pedidos de dimisión para el entonces ministro de Previsión, Romero Jucá y para el Director del Banco Central, Henrique Meirelles, ambos con procesos abiertos en el Supremo Tribunal Federal (STF). En aquel momento, parecía mayor el costo de retirar a estas dos importantes figuras del primer escalón de la administración federal

que el de ratificarlos en su cargo y enfrentar eventuales acusaciones de corrupción.

- Una vez conocidas las primeras denuncias contra Roberto Jefferson, el gobierno salió en apoyo del socio “atacado”, a punto tal de que el mismo presidente Lula declaró que no dudaría en firmarle al denunciado en cuestión un cheque en blanco. A su vez, concentró los esfuerzos en evitar la instalación de una CPI que investigara el supuesto esquema de corrupción en los correos. Esfuerzos que fueron vanos, no sólo por la presión pública luego de las revelaciones de Jefferson con respecto al esquema de mensualidades, sino por la propia incapacidad de los operadores políticos del Planalto para convencer a los legisladores de la base aliada y del propio PT de no sumar sus votos a los de la oposición para instalar la comisión. Esto es una muestra de lo que ha sufrido el gobierno en los últimos meses; la poca inclinación de sus propios legisladores a aceptar los dictados ejecutivos. Frente a la fatalidad de la CPI, la bancada oficialista se aseguró por lo menos la dirección de la misma, contrariando la tradición legislativa, para de esta forma privarle a la oposición de una palestra permanente para atacar al gobierno.

- Bien entrada la crisis, las circunstancias obligaron a Lula a hacer una serie de cambios en el gabinete con un triple objetivo: retirar a los funcionarios sospechados, recomponer la relación con la base aliada y finalmente, mejorar la eficiencia de la administración pública. Podríamos inclusive hablar de un cuarto objetivo, cuidar la posición del Campo Mayoritario en el PT (con la salida de Tarso Genro de la cartera de Educación para asumir interinamente la presidencia del PT), pero es preferible tocar este tema en otro apartado.

La salida de Dirceu tiene que ver sin duda con el primer punto, el ministro Jefe de la Casa Civil ya había sobrevivido a un sonado escándalo de corrupción a principios de 2004 (caso Waldomiro Diniz) y pese a la insistencia de diversos sectores sobre la necesidad de su apartamiento, Lula había decidido mantenerlo en el cargo, aunque restándole potestades. Esta segunda sospecha grave de participación en prácticas ilegales hizo imposible su continuidad y Dirceu tuvo que abandonar el puesto. La renuncia de Romero Jucá (Ministerio de Previsión) y la degradación de la Secretaria de Comunicación (Secom) de Luis Gushiken (sospechado de participar en la asignación de contratos de publicidad de las empresas estatales) también entrarían en esta lógica de “limpiar la casa”<sup>7</sup>.

En cuanto al segundo punto la situación es un tanto más compleja, la relación del gobierno con los partidos de la base aliada ha venido deteriorándose desde mucho antes de la explosión del escándalo, en este sentido, la crisis no hizo más que acelerar la necesidad de una reforma ya

<sup>7</sup> Figura que utilizó Lula en una aparición en cadena nacional sobre fines de junio para hacer referencia a la lucha contra la corrupción que su gobierno había llevado adelante hasta el momento.

concebida como imprescindible para garantizar un apoyo sólido, sobre todo del Congreso. El primer intento serio del presidente Lula en esta dirección se dio sobre fines de junio, cuando ofreció al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) “en pleno” formar un gobierno de coalición. Movida arriesgada, ya que si bien un sector de este partido ocupa dos puestos en el gabinete desde hace tiempo y acompaña a la bancada oficialista en la sede legislativa, hay otro sector claramente opositor. En definitiva, las negociaciones no arrojaron el resultado esperado y el ala “opositora” del PMDB declinó la oferta. No obstante, el sector cercano al Planalto, vio recompensaba su fidelidad (que expresó en una carta de apoyo firmada por buena parte de sus legisladores) con un ministerio más. En esta búsqueda de mayor solidez en la base, también el PP recibió un ministerio, concretando así una declarada aspiración. La entrada de este partido en el gabinete se explica casi exclusivamente por la necesidad del gobierno de entrar en buenos términos con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, referente de esta sigla. Pese a que en los papeles Severino aparecía del lado del oficialismo (el PP forma parte de la coalición gubernamental), en los últimos tiempos no había dado sino dolores de cabeza a los operadores de Lula. La posterior renuncia de Severino a su puesto no implicó el retiro del ministerio para el PP, que finalmente terminó apoyando la candidatura oficialista del Planalto.

En cuanto al último punto, parece atinado afirmar que Lula ha aprovechado la complicada coyuntura para poner en práctica una serie de medidas largamente contempladas tendientes a mejorar la calidad de la administración pública. Ejemplo de esta preocupación por la eficiencia es el nombramiento de Dilma Rousseff al frente de la Casa Civil. La nueva ministra es conocida por su perfil técnico, diferenciándose del perfil más político de su antecesor, José Dirceu y tendrá a su cargo el difícil trabajo de coordinar las acciones de las demás carteras. Lula parece confiar en su calidad de gerenciamiento para mostrar un gobierno funcionando de manera articulada. Otras acciones tomadas con el objetivo de mejorar la administración han sido las conocidas como “choque de gestión”, por el momento estas han incluido la unificación de los organismos nacionales de recaudación en una sola entidad: la “Receita Federal do Brasil” y la obligación para las reparticiones públicas federales de reservar un 70% de los cargos de confianza a los funcionarios profesionales, reduciendo de esta forma la presencia de funcionarios políticos en las altas esferas de la administración.

- El episodio Severino: La explosión del escándalo alrededor de Severino Cavalcanti sobre principios de septiembre tomó a los operadores políticos del Planalto por sorpresa y generó en éstos diversas reacciones, a medida que evolucionaba. En un principio el gobierno intentó mostrarse

ajeno al conflicto, bajo el argumento de que cualquier proceso que se iniciara contra el presidente de la cámara, atañía únicamente a los parlamentarios de esa casa. Sin embargo, la preocupación era visible, se temía que, en un marco político inestable, Severino fuera reemplazado por alguien que jugara directamente en contra de los intereses del Planalto. Por ello y en aquellos primeros movimientos, la base legislativa más fiel al gobierno no apoyó los esfuerzos de la oposición para forzar la denuncia de Cavalcanti. Y esto fue así hasta que las pruebas contra el diputado acusado fueron lo suficientemente contundentes como para no dejar dudas de la fatalidad de su alejamiento. Desde allí, los hombres de Lula comenzaron a planear el escenario de sucesión. La consigna era la de evitar que el candidato de la oposición, José Thomas Nonó (PFL) accediera al puesto vacante: una nueva derrota en el ámbito del Congreso hubiera mostrado a un gobierno demasiado limitado a la hora de buscar cualquier tipo de articulación política. La tarea no era nada sencilla, la oposición mostraba un frente sólido (Nonó contó con el apoyo de PFL, PSDB), los partidos de la base aliada dividían sus preferencias entre distintos candidatos y para colmo de males, el oficialista PT no encontraba un candidato propio que pudiera captar suficientes adhesiones. De manera que se optó por declinar esta posibilidad y alrededor de la candidatura de Aldo Rebelo (PC do B) se articularon los movimientos de la coalición oficial. El gobierno, conciente de la gravedad del desafío, jugó fuerte en el proceso de elección, los principales operadores políticos fueron movilizados, ministros de distintas áreas y partidos y hasta el propio Lula intervinieron en la campaña a favor de Aldo. No sólo esto, según informes de la prensa y afirmaciones de la oposición, el gobierno también recurrió ampliamente a otra serie de instrumentos utilizados en tiempos de crisis, la liberación de enmiendas parlamentarias al presupuesto y la promesa de mantenimiento o creación de puestos en la administración pública para aquellos que acompañaran al candidato oficial. Sea como fuere, los números de la elección dan una pauta de lo difícil que fue el proceso: en primera vuelta, y sobre un total de 513 diputados, los principales contendientes (Aldo y Nonó) empataron con 182 votos, y en segunda vuelta, el triunfo fue para el candidato oficial por sólo 15 voluntades.

En definitiva, la elección de Rebelo como presidente de la Cámara de Diputados puede mirarse desde dos ángulos principales. Es, en primera medida, un triunfo indiscutible para el gobierno de Lula, que recupera un puesto de enorme importancia institucional luego de la debacle de febrero último. Muestra que, a pesar del desastre producido por la crisis, el Planalto está en condiciones de articular mínimamente una base de apoyo en el Congreso y finalmente es una bocanada de oxígeno en medio de una situación que aparecía sofocante. En segundo lugar, sin embargo, lo apretado de la victoria deja ver que el apoyo de Lula en Congreso dista de ser mayoritario, que

la base no acompaña incondicionalmente y que la oposición ha ganado presencia y solidez.

- El papel de Lula: desde el inicio de la crisis el presidente evitó involucrarse directamente en los escándalos: evadiendo cualquier referencia directa a los esquemas denunciados o a los actores implicados. En sus primeras referencias sólo aludió a las denuncias de forma genérica, hablando de la necesidad de investigar y castigar a los eventuales implicados, haciendo a la vez extensas descripciones de lo actuado por su gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. A medida que la crisis se agigantaba y figuras del Congreso y de su propio partido se veían involucradas, el presidente mudó su discurso para hablar de ataques de sectores de derecha para desestabilizarlo o de una “conspiración de la elite brasileña” para alcanzarlo con las denuncias. La mudanza también implicó una intensa gira por ciudades del interior y el contacto casi permanente con auditorios populares cercanos a su discurso histórico, en los cuales apeló a su capital moral para diferenciarse de los escándalos: “está por nacer quien pueda discutir ética conmigo” dijo el 23 de julio en la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la Petrobras.

Hubo que esperar más de dos meses desde las denuncias de Jefferson para escuchar una referencia directa del Presidente Lula a los escándalos. Y la misma se produjo poco después de las duras revelaciones de Duda Mendonça a la Comisión del Congreso y la encuesta Datafolha (el peor momento, como se recordará). En el marco de una reunión ministerial en la Granja do Torto concebida para movilizar la detenida agenda pública el 12 de agosto, el mandatario dijo estar conciente de la gravedad de la crisis, pidió disculpas en nombre del PT y del gobierno y afirmó sentirse indignado por las revelaciones que aparecían cada día. Sin embargo, intentó despejar cualquier indicio de culpabilidad propia al declarar que se sentía “traicionado, traicionado por prácticas inaceptables de las que nunca tuve conocimiento”. Acto seguido renovó su compromiso con la necesidad de una reforma política y cerró el discurso con una llamada de apoyo: “tengo certeza de que puedo contar con el pueblo brasileño”<sup>8</sup>.

En los últimos tiempos, el dato positivo de la elección de Aldo Rebelo le ha dado a Lula un nuevo aire para pasar a la ofensiva con su discurso y postura frente a los acontecimientos, para iniciar él mismo manifestaciones en contra de un clima artificial de “denuncismo” que hizo al país vivir “subordinado a centenas y centenas de denuncias”<sup>9</sup>. A su vez, también parece haber suavizado su posición frente a sus compañeros del PT sospechados (¿los traidores?), afirmando que “ustedes no son corruptos,

cometieron errores, pero no corrupción”. La intención es dejar la crisis atrás.

## El PT

En segundo lugar, pueden hacerse una serie de consideraciones acerca de cómo el PT ha enfrentado la crisis. Como hemos visto, el partido de Lula ha quedado en el centro de los escándalos y ha sufrido enormemente con la explosión de las denuncias de corrupción. Sobre todo si se tiene en cuenta que desde su creación hace 25 años, el partido ha hecho de la ética política y transparencia administrativa uno de los ejes centrales de su predicación. De acuerdo con la edición de septiembre de 2005 de la encuesta CNT/Sensus, el 39,5% de los entrevistados considera que el actor político más vinculado a los episodios de corrupción ha sido el PT, seguido por el Congreso (24,2%) y el propio Presidente Lula (13,5%). Esta situación ha repercutido en el esquema de relación de las muchas corrientes internas que atraviesan al partido. La crisis ha generado tensiones y renovado rivalidades. Los sectores más radicales del PT, que prácticamente desde el inicio del gobierno Lula han expresado su insatisfacción con los rumbos tomados, han visto una oportunidad para revalidar sus críticas, especialmente en relación a la política de alianzas que, en su óptica, no sólo no ha ayudado a asegurar la gobernabilidad sino que además ha contribuido a dilapidar el patrimonio ético del PT.

En el centro de las acusaciones ha quedado la corriente moderada que ha servido de sostén a la gestión presidencial de Lula, el Campo Mayoritario, que desde hace años maneja los hilos del partido. Ambas corrientes tuvieron posiciones encontradas sobre cómo hacer frente a las denuncias que involucraban a sus propios hombres, en este sentido, mientras los sectores de izquierda pidieron la dimisión de la cúpula partidaria inmediatamente después de conocidas las denuncias de Jefferson, el campo mayoritario optó por mantener a esa dirigencia (militante de sus filas) aun cuando la contundencia de las evidencias hacían casi indudable su culpabilidad. Esta diferencia de apreciación no tenía sólo que ver con el futuro de los militantes acusados de corrupción, sino también con movimientos internos de cara a la renovación de autoridades partidarias del 18 de septiembre. En este sentido, la renuncia de la cúpula -especialmente la del Presidente José Genoino que hasta ese momento corría a la reelección- significaba un golpe importante al Campo Mayoritario de cara a aquel proceso aumentando las chances de la izquierda. Por esta razón, Soares, Pereira y Genoino, sólo dejaron sus puestos casi un mes después de haber sido involucrados en el esquema y cuando su situación como vimos, se hizo insostenible.

La composición de la nueva cúpula por su lado, reflejó la preocupación del Planalto por mantener control sobre la dinámica del partido: todos los reemplazos de los puestos clave fueron elegidos entre figuras de peso en el PT, y su nuevo

<sup>8</sup> O Estado de Sao Paulo, 13 de agosto de 2005.

<sup>9</sup> O Estado de Sao Paulo, 4 de octubre de 2005.

presidente interino Tarso Genro, dejó una cartera importante (Educación) para asumir su función en la sigla. Desde la corriente moderada de Lula Da Silva parecen estar decididos a evitar que los sectores de izquierda ganen espacios decisivos en el PT y puedan eventualmente poner algún tipo de trabas a las políticas seguidas desde el Poder Ejecutivo. Cuestión que aparece cada vez más complicada, dado que incluso dentro del campo mayoritario han surgido también divisiones, expresadas en la decisión de Genro (el candidato de Lula) de no presentarse como candidato a la presidencia del PT, en virtud de serias diferencias con el polémico José Dirceu, que aún mantiene enormes niveles de influencia en el partido de izquierda.

La elección de autoridades internas del PT realizada el 18 de septiembre ya refleja un cambio en la correlación de fuerzas hacia el interior del partido. Por primera vez en una década, el Campo Mayoritario dejará de ser mayoría absoluta en el Directorio Nacional (máxima instancia de decisión del PT) y su candidato a la Presidencia, Ricardo Berzoini, ha sido incapaz de ganar el puesto en primera vuelta, pese a contar con el apoyo abierto de Lula. Los resultados de la segunda vuelta frente al candidato de la corriente Democracia Socialista Raúl Pont han reflejado asimismo una disputa cerrada (51,6% para Berzoini, 48,4% para Pont) escrutadas el 94% de las mesas, lo que consagra al candidato del Campo Mayoritario) y auguran una dinámica distinta en la vida interna de la principal fuerza de izquierda del Brasil.

La crisis ha tenido también otro efecto, el de haber acelerado la partida de una serie de dirigentes históricos del partido - algunos de ellos conocidos nacionalmente como Plínio de Arruda Sampaio, Hélio Bicudo e Chico Alencar, y otros referentes regionales- acompañados por 5 diputados federales, otros tantos legisladores estatales y municipales, además de alrededor de mil militantes. Algunos de los cuales han recalado en el joven Partido Socialismo y Libertad (PSOL), creado asimismo por parlamentarios expulsados del PT en 2003.

Finalmente, hay que decir que el PT no solamente ha pagado altos costos políticos con el correr de la crisis (perdiendo parte de su "capital moral" por confesarse culpable de financiamiento ilegal de sus actividades), no solamente ha visto acentuarse sus diferencias internas, también ha descubierto que la gestión de la cúpula apartada ha dejado al partido en una situación financiera preocupante. Según algunas informaciones, la deuda del PT, tanto la legal como la no contabilizada, estaría cercana a los R\$ 160 millones, 8 veces más de lo que se suponía. Lo que obligará a la nueva dirigencia a hacer grandes esfuerzos en materia administrativa para asegurar la propia viabilidad de la institución.

Esta situación de descalabro financiero, división interna y pérdida de imagen poco ayuda al gobierno, que necesita de un PT en buena forma para primero, abandonar definitivamente el escenario de crisis, segundo, remontar la parálisis administrativa y legislativa y finalmente pensar en la reelección de Lula.

## La oposición

Como cabría esperar, los partidos opositores al presidente Lula han jugado un papel importante en la crisis, y no por haber sido los generadores de las denuncias (papel que cupo a un "aliado") sino por haber aprovechado la coyuntura para dejar en evidencia al PT y al gobierno. De todos modos, y salvo algunos exabruptos -como el pedido de impeachment que hicieran algunos legisladores del PFL sobre el inicio de los escándalos-tanto el PSDB, como el PFL y el Partido Democrático Laborista (PDT) han mantenido una postura de relativa moderación frente a los acontecimientos, encuadrándose en lo que se podría denominar como "oposición responsable". Comentarios a favor de la continuidad democrática, la gobernabilidad y el mantenimiento de las instituciones han partido de la boca de buena cantidad de representantes de aquellas fuerzas como muestra de su compromiso republicano. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para embestir sobre los flancos del gobierno que la crisis ha dejado desguarnecidos. La iniciativa de la CPI de los Correos, acto reflejo inmediato a las denuncias de la revista *Veja*, fue un movimiento claro para evitar que los escándalos de corrupción tuvieran una vida fugaz. Lo mismo puede decirse del establecimiento de la CPI de las mensualidades y del aprovechamiento de la apertura de la CPI de los Bingos por mandato judicial.

Los funcionarios sospechados, tanto los del gobierno como los del PT, fueron atacados casi despiadadamente mientras los pedidos de renuncia se multiplicaban. El propio ex presidente Fernando Enrique Cardoso (1995-2002), a la sazón importante referente de la oposición y para algunos precandidato para el año entrante, se animó a ofrecerle a Lula una "salida" a la crisis, instándolo a renunciar a sus aspiraciones reeleccionistas para de esta forma se viera libre de limitaciones para convertirse en un árbitro imparcial de la situación. Ofrecimiento que por el momento el mandatario ha declinado. Es digno de resaltar de todos modos que por el momento la oposición ha evitado, salvo algunos casos aislados, atacar directamente al Presidente de la Nación, y no ha intentado involucrarlo directamente en los hechos de corrupción. Como se dijo anteriormente, sólo en un momento muy especial de la crisis, los partidos de la oposición contemplaron con alguna seriedad la apertura de un proceso de juicio político, sin embargo, dicha hipótesis fue rápidamente descartada.

Con la renuncia forzada de Severino Cavalcanti a la presidencia de la Cámara de Diputados, la oposición vio la oportunidad de hacerse con un cargo de enorme peso institucional y articuló un sólido frente alrededor de la candidatura de José Thomas Nonó, que logró, como vimos, poner en serios aprietos a la coalición oficial. Y pese a esta derrota, no cabe la menor duda de que las fuerzas opositoras han salido fortalecidas de un proceso que les ha dado la oportunidad y argumentos de atacar a un gobierno que, aunque con dificultades, mantenía la situación política bajo cierto control. Indicador de tal situación, y como veremos más adelante, es el crecimiento



que los precandidatos presidenciales críticos de Lula han tenido en las proyecciones electorales de las distintas encuestadoras.

### Consideraciones finales: El futuro de Lula

Finalmente cabe hacer referencia a una última cuestión, central por cierto para el escenario brasileño de los próximos tiempos: el futuro político del Presidente Lula. Cuestión que puede asimismos desdoblarse en dos interrogantes básicos: el primero apuntando a la marcha y las perspectivas de la presente administración y el segundo a la posibilidad de reelección del actual mandatario.

A Lula aún le queda por delante poco más de un año de administración y tiene en agenda una serie de proyectos de diversa índole, la mayoría de los cuales deben pasar por el recinto legislativo para convertirse en realidad (sobre todo la agenda de reformas constitucionales). Ahora bien, después de un primer año de importantes triunfos políticos (2003) el Poder Ejecutivo no ha podido movilizar al Congreso a favor de sus principales proyectos. Por el contrario, y sobre todo desde principios de 2005<sup>10</sup>, con la elección de Severino Cavalcanti como presidente de la Cámara de Diputados, el Planalto ha conocido más derrotas que victorias<sup>11</sup>. En este marco, la crisis de corrupción no ha hecho más que complicar la comunicación con la sede legislativa y dificultar las relaciones con los legisladores de la base aliada, resentidas mucho antes de producirse la catarata de denuncias. (No hay que olvidar que la explosión de la crisis provino de las denuncias del presidente de un partido aliado). Seguramente, el costo de conseguir nuevos socios (o de mantener los viejos) ha de aumentar en forma visible para el Palacio del Planalto, no sólo porque la imagen del gobierno ha sido resentida, no sólo porque muchos dirigentes aliados se encuentran incómodos o involucrados en las denuncias, no sólo porque probablemente cada acercamiento que haga el Poder Ejecutivo sobre alguna fuerza o bancada legislativa será sospechada de “fisiologismo” sino porque el propio Lula necesita casi desesperadamente de apoyos que hagan salir a su administración de las dificultades en las que se encuentra. Algo de esto pudo verse en las negociaciones que se llevaron adelante con el PMDB “unificado” que a la postre fracasaron allá por mediados de junio, en aquella oportunidad, y como vimos, el Presidente ofreció a este partido un gobierno de coalición, en aras de asegurar la gobernabilidad. Ofrecimiento que, según trascendió, ni siquiera incluyó la condición de que el PMDB no presentara candidato propio para las elecciones presidenciales de 2006, algo impensable meses atrás. El enorme esfuerzo de articulación y movilización de recursos políticos para elegir a Aldo es también un ejemplo en este sentido.

Tampoco las relaciones con los legisladores del PT deberán ser más fáciles de aquí en adelante. Los escándalos de corrupción han resentido la unidad del partido de izquierda, dejando, por diversas razones, a muchos militantes disconformes. Además, debe tenerse en cuenta que aun antes de los escándalos, los diputados y senadores del partido de gobierno no habían sido del todo permeables a las intenciones del Planalto. El PT no aparece por estos días como un instrumento político del todo confiable o efectivo.

La recomposición de una base de gobierno que le permita al presidente Lula desandar con relativa tranquilidad el camino que le queda por delante no será ni por asomo una tarea fácil. Muchos de los males que Lula ha sufrido han sido por los problemas con la base, por ser incapaz de encontrar los caminos hacia una coalición sólida y amplia como la que el Brasil contemporáneo parece exigir para ser gobernable. Es difícil no coincidir con el diputado Paulo Delgado (PT) en cuanto a su diagnóstico de la crisis: el PT “llegó al poder con una coalición pequeña, no usó los años de democracia para ampliar sus alianzas políticas con base en la construcción de nuevas identidades y precisó recurrir a otros métodos para firmar una base parlamentaria”<sup>12</sup>. Una afirmación por demás sugestiva.

Pese a la victoria conseguida con la elección de Aldo Rebelo, la situación de la coalición de gobierno aún es frágil y si bien parece abrirse una oportunidad para retomar la iniciativa política y reiniciar la construcción de apoyos sólidos en el Congreso, es apenas un punto de partida. Y los tiempos son cortos en un año electoral.

En cuanto a las perspectivas de reelección del presidente Lula, se puede decir que a lo largo de la crisis ha habido tres momentos, aunque sin dejar de resaltar el incontrovertible hecho de que los escándalos han desgastado tanto su figura, la imagen de su gobierno y su potencial electoral.

El primer momento de las posibilidades electorales de Lula conviviendo con las denuncias de corrupción es extrañamente positivo y corresponde a las primeras mediciones que se hicieron con la crisis ya afianzada sólidamente en el máximo escalón de la agenda pública brasileña. Para sorpresa de muchos analistas, los resultados de los trabajos de CNT/Sensus y de Datafolha de mediados y fines de julio respectivamente, mostraron a un Lula con índices de aprobación intactos (CNT/Sensus 40,3% -+0,5- y Datafolha 35 % -1%- de opinión positiva sobre el gobierno) y ganador en los escenarios electorales planteados (9 puntos porcentuales por encima de su inmediato perseguidor José Serra en primera vuelta y 4 puntos por encima en segunda, según Datafolha y para CNT/Sensus 18 y 13,6 puntos por encima respectivamente). Se ensayaron una serie de explicaciones para semejante

<sup>10</sup> Lo que no dejaría de ser irónico si se llegaran a comprobar las denuncias de pago de mensualidades, ya que el gobierno habría pagado por un apoyo que nunca se concretó y habría tirado 25 años de esfuerzo ético por un esquema de corrupción ineficaz.

<sup>11</sup> Para mas específicos, fue a principios de 2004 y como consecuencia del caso Waldomiro Diniz, que la relación entre el ejecutivo y legislativo comenzó a deteriorarse, pero fue en febrero de 2005 que los golpes se volvieron mas duros.

<sup>12</sup> O Estado de Sao Paulo, 18 de septiembre de 2005.

fenómeno, de las cuales pareció imponerse la del “mito lula” una especie de aura protectora nacida de su carisma y reconocida militancia de 25 años., sea como fuere, lo cierto es que hasta esa altura de los acontecimientos, los escándalos no habían afectado al presidente Lula.

Sin embargo, tal situación no se mantuvo por mucho tiempo y los cambios en el humor popular fueron evidenciándose en los estudios posteriores. En los trabajos de Datafolha de agosto de 2005 y de CNT/Sensus y CNI/Ibope de septiembre, se advierte un segundo momento en la carrera reeleccionista de Lula, ya claramente negativo. La opinión positiva sobre el gobierno cayó 4 puntos según Datafolha (de 35 a 31% entre julio y agosto), 6 puntos para CNI/Ibope (de 35 a 29% entre junio y septiembre) y 4,5 para CNT/Sensus (de 40,3 a 35,8% entre julio y septiembre). Asimismo, se elevaron los porcentajes de opinión negativa en los tres trabajos, y alcanzando los máximos históricos y aproximándose a los niveles de opinión positiva, en los casos de Datafolha e Ibope. En cuanto a las simulaciones electorales, el panorama apareció también complicado para el primer mandatario. Para las tres encuestadoras la intención de voto en Lula para la primera vuelta cayó de manera visible: 4 puntos para Datafolha (de 34 a 30% entre julio y agosto), 5 puntos para CNI/Ibope (de 38 a 33% entre junio y septiembre) y 5,7 puntos para CNT/Sensus (de 37,1 a 31,4% entre julio y septiembre). Como reverso, varios candidatos opositores mejoraron sus perspectivas, sobre todo el alcalde Sao Paulo José Serra (PSDB), que vio cómo la brecha que lo separaba de Lula se achicaba en cada uno de los casos: de 9 a 3 puntos para Datafolha y CNI/Ibope y de 18 a 7,6 puntos para CNT/Sensus, otros opositores que mejoraron en su intención de voto fueron Anthony Garotinho (PMDB) y Heloísa Helena (PSOL). Finalmente, y en relación a la segunda vuelta electoral, Lula

perdería con Serra de acuerdo al relevamiento de Datafolha (48 a 39%) y estaría apenas por encima según CNT/Sensus (37,9 a 37,5 %).

El tercer momento en relación a la posibilidad de reelección del Presidente Lula se abre con la victoria de Aldo Rebelo y refleja un cambio de postura del gobierno frente a la cuestión más que una mudanza en las condiciones objetivas. Lula y sus operadores parecen estar convencidos de que es posible dejar la crisis atrás y reencauzar la campaña reeleccionista. Después de todo, y al margen de las tendencias, los números no son tan malos y muestran a Lula todavía en la pelea. Es la afirmación y explotación de una característica singular que el mandatario parece tener y que él mismo ha resaltado en alguna oportunidad: “si no fuera yo, y fuera otro presidente que estuviera viviendo estas circunstancias, posiblemente estuviera debajo de cero”, refiriéndose a que en la misma coyuntura, cualquier otro dirigente hubiera caído de manera mucho más estrepitosa en la preferencia pública. “creo que mi relación con la sociedad brasileña es muy fuerte”, remató<sup>13</sup>.

La pregunta sin embargo subsiste ¿será Lula reelecto? Hasta hace unas semanas era una alternativa poco probable, dado que todo parecía derrumbarse: el gobierno no encontraba respuesta alguna a la crisis, la base aliada continuaba desarticulada, el PT dividido y bajo amenaza de un éxodo que no fue tal, el campo mayoritario complicado por las corrientes de izquierda y una oposición que aparecía sólida y unida. Después de la victoria en la Cámara de Diputados el escenario parece otro y se abre una puerta para revertir las tendencias negativas que han afectado la imagen y posibilidades electorales del presidente Lula. De todos modos, los obstáculos son grandes y valga la insistencia, el clima de crisis aún no ha abandonado la arena política brasileña.

### Fuentes:

Fleischer David, Brazil Focus, varias ediciones.  
O estado de Sao Paulo, varias ediciones.  
Folha de Sao Paulo, varias ediciones.  
Jornal O Globo, varias ediciones.  
El Nuevo Herald ([www.elnuevoherald.com](http://www.elnuevoherald.com)), varias ediciones.

### Encuestas:

**Pesquisa Datafolha, agosto de 2005.** Especificaciones técnicas: Período: 10 de agosto de 2005. Universo: conjunto de la población mayor de 16 años. Muestra: 2551 en 127 municipios. Margen de error: 2% y grado de confianza de 95%. ([www1.folha.uol.com.br/folha/datafolha/](http://www1.folha.uol.com.br/folha/datafolha/)).

**Pesquisa CNI-Ibope, septiembre de 2005.** Especificaciones técnicas: Período: 8 a 12 septiembre de 2005. Alcance: Nacional. Universo: electores con 16 años y mas. Muestra: 2200 entrevistas en 143 municipios. Margen de error: 2.2 % y grado de confianza de 95%. ([www.ibope.com.br](http://www.ibope.com.br)).

**Pesquisa CNT/Sensus, septiembre de 2005.** Especificaciones técnicas: Período: 6 a 8 de septiembre de 2005. Alcance: Nacional. Muestra: 2000 entrevistas en 195 municipios. Margen de error: 3 % y grado de confianza de 95%. ([www.sensus.com.br](http://www.sensus.com.br)).

<sup>13</sup> O Estado de Sao Paulo, 14 de septiembre de 2005.